



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

JAIME ALMENAR BELENGUER, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

### CERTIFICA:

Que en la Sesión num. 29/06 del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el día 7 de septiembre de 2006, se ha adoptado el siguiente

### ACUERDO

Por el que se aprueba la:

**RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DENIEGA LA PETICIÓN DE SUSPENSIÓN SOLICITADA POR LA ENTIDAD ASOCIACION DE EMPRESAS OPERADORAS Y DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 13 DE JULIO DE 2006, SOBRE LA DESIGNACIÓN DE VALORES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS DE TRÁNSITO CON DESTINO A NUMERACIONES DE RED INTELIGENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA OIR 2005.**

En relación con la solicitud de suspensión incorporada al recurso de reposición interpuesto por la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (en adelante, ASTEL) contra la Resolución de esta Comisión, de fecha 13 de julio de 2006, sobre la designación de valores para la identificación de llamadas de tránsito con destino a numeraciones de red inteligente de acuerdo a lo establecido en la OIR 2005, el Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha adoptado, en su sesión núm. 29/2006 del día de la fecha, la siguiente Resolución:

Resolución de 7 de septiembre de 2006, recaída en el expediente AJ 2006/1035.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

### HECHOS

**PRIMERO.-** Con fecha 13 de julio de 2006, el Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones dictó Resolución sobre la designación de valores para la identificación de llamadas de tránsito con destino a numeraciones de red inteligente (en adelante, RI) de acuerdo a lo establecido en la OIR 2005.

A través del Resuelve de la citada Resolución, esta Comisión decidió lo siguiente:

*“**Primero.-** Los siguientes valores de Código de Provincia ficticia del NRN (dígitos CD para el caso de operadores con Código de Operador de AB de dos dígitos, o DE para el caso de operadores con Código de Operador ABC de tres dígitos) se utilizarán para la identificación de llamadas de tránsito con destino numeraciones de red inteligente:*

<b>Dígitos CD/DE del NRN</b>	<b>Modelo interconexión origen</b>
60	operador origen con modelo de terminación
61	operador origen con modelo de acceso
62	llamadas a 905 - operador origen con modelo de acceso

***Segundo.-** El procedimiento de identificación de llamadas de tránsito con destino numeraciones de RI deberá estar operativo en el plazo de dos meses desde la fecha de aprobación de la presente Resolución”.*

**SEGUNDO.-** Con fecha 7 de agosto de 2006, ha tenido entrada en el Registro de esta Comisión escrito presentado por el representante de ASTEL, en virtud del cual interpone recurso de reposición contra la Resolución a la que se refiere el antecedente de hecho anterior.

La entidad recurrente muestra su disconformidad con la Resolución impugnada solicitando la nulidad de pleno derecho de la misma y en su defecto su anulabilidad con base en lo siguiente:

1. Por constituir una vulneración del ordenamiento jurídico en lo concerniente a las reglas que rigen la gestión de los recursos de numeración y a la regulación de la interconexión, en particular, las referentes a la Oferta de Interconexión de Referencia al no desarrollar los aspectos económicos, técnicos y jurídicos del apartado de la Resolución de 23 de noviembre de 2005 que se pretende solventar mediante la Resolución recurrida

2. Por carecer de suficiente motivación al no extraerse las consecuencias lógicas de la decisión de no considerar imperativa la aplicación de los precios de la OIR 2005.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Asimismo solicita que se adopten determinadas medidas cautelares mientras se resuelve el recurso de reposición interpuesto, solicitud que fundamenta en lo siguiente:

La recurrente aduce que para evitar perjuicios innecesarios a las partes y para asegurar la eficacia de la Resolución que pudiera recaer como consecuencia del recurso interpuesto se adopte una medida cautelar o provisional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJPAC) y el artículo 31 del Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, consistente en suspender la entrada en vigor de la Resolución recurrida hasta que se resuelva el recurso de reposición o al menos, durante otros dos meses adicionales hasta el 13 de noviembre de 2006.

Manifiesta que se cumplen los requisitos requeridos por esta Comisión para que se puedan adoptar medidas cautelares, tales como:

- Existencia de elementos de juicio suficientes para adoptar la medida.

Señala que esa Asociación y las demás partes en el procedimiento han aportado suficientes elementos de juicio, tanto en el escrito concerniente al recurso de reposición interpuesto como en el escrito de alegaciones, para que esta Comisión pueda adoptar la medida cautelar en el sentido solicitado.

- Necesidad de asegurar la eficacia de la Resolución que pudiera recaer.

Señala que en ausencia de la medida cautelar, la eficacia de la Resolución estimatoria del recurso interpuesto *“quedaría gravemente mermada”* al ser los costes económicos de implantar un sistema y después modificarlos irrecuperables para las partes e inducirían a considerar antieconómica una nueva modificación tras la resolución del recurso, llevándolo a su ineficacia práctica, ya que las ventajas del sistema de nueve NRN se confrontarían con el coste de una doble actuación en las centrales.

- Inexistencia de perjuicios de difícil o imposible reparación a los interesados o efectos que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

En primer lugar manifiesta que las alegaciones de los distintos interesados muestran que ninguna de ellas entiende que haya habido perjuicio en esperar a que se resuelva el recurso y se adopte el sistema de nueve NRN.

En segundo lugar argumenta que concurren los requisitos enumerados por la doctrina del Tribunal Constitucional para que puedan adoptarse medidas cautelares sin que se produzca una vulneración de derechos constitucionales, esto es:



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

- a. Que exista una norma jurídica que permita su adopción.
- b. Que se adopten las medidas por resolución en Derecho.
- c. Que se basen en un juicio de razonabilidad en cuanto a la finalidad perseguida y circunstancias concurrentes.

En virtud de lo dispuesto anteriormente y de acuerdo con los preceptos citados y con el artículo 111.2 de la LRJPAC, solicita la suspensión de la Resolución recurrida hasta que se resuelva el recurso de reposición interpuesto al concurrir los requisitos establecidos en el citado artículo ya que:

- La ejecución de la resolución que se recurre causaría efectos de difícil o imposible reparación.

Aduce que a lo largo del recurso interpuesto ha expuesto los motivos que sitúan a sus asociados en una grave posición de indefensión.

- Que el recurso interpuesto se fundamenta entre otros, en una causa de nulidad, en concreto la establecida en el primer inciso del artículo 62.1.e) de la LRJPAC en lo concerniente a las reglas que rigen la gestión de la numeración.

- En relación con la ponderación entre el perjuicio que causaría al interés público la suspensión y el perjuicio que se le causaría como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido manifiesta que la suspensión de la resolución recurrida no sólo no es contraria al interés público sino que es conforme a éste, ya que *“en el sector de las telecomunicaciones el interés público se identifica con el incorrecto (sic) funcionamiento del mercado y el beneficio de los usuarios finales, siendo el primero requisito necesario para que se pueda cumplir adecuadamente el segundo”*. Señala que no se ha alegado por esta Comisión ningún interés público perjudicado si se reservaran nueve valores en vez de tres, mientras que todos los interesados señalaron en el procedimiento que dio lugar a la Resolución recurrida, como el correcto funcionamiento de la interconexión exigía dicha reserva.

A los anteriores antecedentes de hecho les son de aplicación los siguientes

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### I. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PROCEDIMENTALES.

#### PRIMERO.- Admisión a trámite.

En el escrito presentado por ASTEL interponiendo recurso de reposición contra la Resolución de fecha 13 de julio de 2006, se viene a solicitar la suspensión de la ejecución de la citada Resolución impugnada.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

El artículo 111 de la LRJPAC regula la suspensión de la ejecución de los actos administrativos, cuando éstos han sido objeto de cualquier recurso administrativo.

Habida cuenta que el recurso de reposición presentado por la entidad ASTEL, en el que se solicita la suspensión del acuerdo impugnado, se interpone contra una Resolución de esta Comisión, que resulta susceptible de recurso según lo dispuesto por los artículos 107 y 116 de la LRJPAC dentro del plazo previsto por el artículo 117 de la citada Ley, y que la solicitud de suspensión se fundamenta en la posible existencia de las circunstancias previstas en el artículo 111.2 de la LRJPAC, procede admitir a trámite la referida petición de suspensión para su resolución final.

### **SEGUNDO.- Competencia para resolver.**

Corresponde al Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la competencia para resolver el mencionado recurso de reposición y, por tanto, la petición de suspensión en él contenida, por ser el órgano administrativo que dictó el acto impugnado.

## **II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS MATERIALES.**

### **Primero.- Sobre la petición de suspensión de la Resolución recurrida.**

Conforme a lo expuesto en los antecedentes de hecho, ASTEL solicita expresamente la suspensión de la ejecución de la Resolución por ella impugnada.

Según lo establecido en el artículo 111.1 de la LRJPAC, la interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

No obstante, el órgano a quien compete resolver el recurso podrá, en virtud del artículo 111.2 de la LRJPAC, suspender la ejecución del acto impugnado, previa ponderación entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido. Para ello, se señalan en el citado artículo dos circunstancias alternativas que deben concurrir para que sea posible la suspensión:

- Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
- Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1 de la LRJPAC.

Por consiguiente, en aplicación del artículo citado, para determinar si procede o no acceder a la suspensión solicitada por la recurrente, esta Comisión ha de



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

analizar, en primer lugar, si concurre alguna de las circunstancias señaladas en las letras a) y b) del artículo 111.2 de la LRJPAC. En el caso de que se compruebe la concurrencia de alguna de ellas, deberá analizarse, en segundo lugar, si debe prevalecer el interés público o de terceros, o el del interesado en la suspensión del acto, previa ponderación razonada de los perjuicios que a unos y otros causaría la suspensión o la ejecución inmediata del acto recurrido.

Asimismo, cabe recordar que la eficacia del acto administrativo sometido a debate se tendrá que valorar desde la perspectiva del interés general, puesto que según la jurisprudencia dictada al efecto esta valoración constituye un presupuesto más para la adopción de una medida como la ahora solicitada, por formar parte este interés general del núcleo esencial en la aplicación del derecho administrativo en su conjunto.

Pues bien, ha de señalarse que ASTEL ha invocado, por un lado, la nulidad de pleno derecho de la Resolución recurrida o en su defecto su anulabilidad por suponer una vulneración del ordenamiento jurídico y por carecer de la adecuada motivación, lo que le ha generado indefensión. Además, ha solicitado la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada, en base al artículo 111 de la LRJPAC.

Por las razones que seguidamente se exponen, esta Comisión considera que, en el presente caso no concurren las circunstancias necesarias que determinarían la suspensión de la Resolución recurrida al amparo de lo dispuesto en el artículo 111 de la LRJPAC.

### **Segundo.- Sobre las causas de nulidad alegadas para impugnar la Resolución.**

En concreto, y con base en el primer inciso del artículo 62.1. e) de la LRJPAC, se denuncia la nulidad de pleno derecho de la Resolución. A estos efectos procede poner de manifiesto lo establecido en el citado artículo:

*“62. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:*

*...*

*e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido ...*

*...”*

La recurrente manifiesta que el acto recurrido constituye el supuesto previsto en el artículo citado, esto es, que el acto ha sido dictado vulnerando el ordenamiento jurídico en lo concerniente a las reglas que rigen la gestión de los recursos de numeración.





## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Cabe recordar en primer lugar que, para apreciar si el pretendido vicio determinante de la nulidad resulta patente y notorio, tal y como exige la consolidada doctrina jurisprudencial sobre la apariencia de buen derecho (*fumus boni iuris*) de la nulidad alegada, será preciso el análisis del contenido del motivo de impugnación con abstracción del fondo del asunto.

En este sentido se expresa la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su Sentencia de 23 de marzo de 2001 (RJ 2001\3004) al indicar que:

*“No resulta suficiente por último, en contra de lo que se alega, la simple invocación de la existencia de un vicio de nulidad de pleno Derecho de los acuerdos impugnados para que proceda acordar su suspensión cautelar. Esta Sala tiene declarado que la apariencia de buen Derecho sólo puede admitirse en casos en los que la pretensión del recurrente aparezca justificada en forma manifiesta, sin necesidad de un análisis detenido de la legalidad, que está reservado necesariamente al proceso principal.”*

Además, en el momento de analizar la causa de nulidad alegada por la recurrente debe tenerse en cuenta el criterio de interpretación restrictiva para la apreciación de dicha causa establecido por la jurisprudencia y expuesto, entre otras muchas, en Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 11 de noviembre de 2003 (RJ 2004/402), en cuyo fundamento de Derecho octavo señala lo siguiente:

*“La jurisprudencia, al considerar el aspecto positivo o habilitante del *fumus boni iuris*, advierte frente a los riesgos de perjuicio (Dogma vom Vorwegnahmeverbot en la doctrina alemana), declarando que «la doctrina de la apariencia de buen derecho, tan difundida, cuan necesitada de prudente aplicación, debe ser tenida en cuenta al solicitarse la nulidad de un acto dictado en cumplimiento o ejecución de una norma o disposición general, declarada previamente nula de pleno derecho o bien cuando se impugna un acto idéntico a otro que ya fue anulado jurisdiccionalmente, pero no [...] al predicarse la nulidad de un acto, en virtud de causas que han de ser, por primera vez, objeto de valoración y decisión en el proceso principal, pues, de lo contrario se prejuzgaría la cuestión de fondo, de manera que por amparar el derecho a una efectiva tutela judicial, se vulneraría otro derecho, también fundamental y recogido en el propio artículo 24 de la Constitución (RCL 1978\2836), cual es el derecho al proceso con las garantías debidas de contradicción y prueba, porque el incidente de suspensión no es trámite idóneo para decidir la cuestión objeto del pleito» (autos de 22 de noviembre de 1993 [RJ 1993\8943] y 7 de noviembre de 1995 [RJ 1995\8137] y sentencia de 14 de enero de 1997 [RJ 1997\131], entre otras muchas resoluciones).*

Pues bien, por lo que se refiere a los motivos alegados por ASTEL para fundamentar la nulidad de pleno derecho de la Resolución impugnada, a saber, el haberse dictado el acto prescindiendo del procedimiento legalmente



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

establecido (por falta de motivación en la resolución), es preciso señalar que la concurrencia en el presente caso del vicio invocado no resulta manifiesta o inequívoca, pues se requiere el análisis de fondo de dicha cuestión a los efectos de determinar si efectivamente tuvo lugar la vulneración de dicho derecho en el procedimiento, y si ello conllevaría la nulidad de la Resolución posterior dictada por la Comisión.

En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) en Sentencia de 18 de mayo de 2004 (RJ 2004/4409) señalando:

*“...que es también doctrina reiterada del Tribunal Supremo, la que precisa que la pieza de suspensión o el incidente de medidas cautelares no es el cauce o momento procesal oportuno para resolver la cuestión de fondo, ni por tanto para hacer valoraciones que sean propias del fondo del asunto, pues ello sería tanto como desvirtuar su propia naturaleza y contenido, y el resolver la cuestión de fondo sin trámite de demanda, de prueba y de conclusiones, esto es, sin las garantías y trámites que al efecto ha establecido el Legislador”.*

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y haciendo abstracción del análisis detenido de la legalidad del acto impugnado, reservado al procedimiento principal que se hará en la resolución del presente recurso, al analizar el contenido del motivo de nulidad señalado, resulta que la presunta vulneración alegada no se deduce a primera vista ni de manera evidente o manifiesta. Antes al contrario, esta Comisión considera suficientemente fundamentada, en los términos del art. 54.1 de la Ley 30/1992, la resolución cuestionada. Prueba de ello son los argumentos expuestos por el recurrente, que reflejan el conocimiento perfecto de los argumentos de la resolución.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio del análisis de las pretensiones que esta Comisión realizará en el procedimiento principal, se hace necesario significar que la supuesta infracción de las reglas que rigen la gestión de los recursos de numeración no puede dar lugar a suspender la ejecución de la resolución dictada por esta Comisión en fecha 13 de julio de 2006 por no ser un supuesto de nulidad de los contemplados en el artículo 62 de la LRJPAC, sino, en todo caso, un caso de anulabilidad de conformidad con el artículo 63 de la misma Ley.

### **Tercero.- Sobre los perjuicios que se ocasionan con la ejecución de la Resolución recurrida.**

ASTEL manifiesta en su escrito de recurso, al solicitar la suspensión que la ejecución de la Resolución recurrida causaría efectos de imposible o difícil reparación. En concreto alega que *“A lo largo de este escrito y de nuestro escrito de alegaciones exponemos los motivos que sitúan a nuestros asociados en una grave posición de indefensión”.*





## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

A este respecto cabe señalar, entre otras, lo manifestado por la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su Auto de 3 de junio de 1997 (RJ 1997/5049):

*“la mera alegación, sin prueba alguna, no permite estimar como probado, que la ejecución del acto impugnado (o la vigencia de la disposición impugnada) le pueda ocasionar perjuicios, ni menos que éstos sean de difícil o imposible reparación”.*

De igual modo, en su Auto de 26 de marzo de 1998 (RJ 1998/3216), señalaba ese Tribunal que:

*"No basta, por otra parte, que la petición de suspensión vaya acompañada de una expresa manifestación de los perjuicios irreparables que pudieran irrogarse al recurrente caso de no acordarse, siendo necesario según reiterada doctrina de esta Sala que se aporte al menos un principio de prueba de la sobreveniencia de tales perjuicios, o bien que la existencia de los mismos pueda deducirse de la naturaleza del acto impugnado, caso de no accederse a ella. Por otra parte, resulta absolutamente necesario que tales circunstancias sean patentes en el momento de la solicitud de suspensión."*

La recurrente no aporta prueba alguna sobre la verdadera existencia de los perjuicios alegados ni de su posible cualificación. No se manifiestan en el escrito de recurso, los hipotéticos perjuicios que la ejecución de la Resolución impugnada pudiese causarle, ni pueden deducirse de la Resolución recurrida. Por lo tanto, tampoco concurre en el presente caso la circunstancia establecida en el apartado a) del artículo 111.2 de la LRJPAC para que se pueda acceder a la petición de suspensión.

A mayor abundamiento, es preciso señalar que, en el presente supuesto, además de no concurrir ninguna de las circunstancias previstas en las letras a) y b) del artículo 111.2 de la LRJPAC, la ponderación de perjuicios exigible para proceder a la suspensión determina que serían mayores los perjuicios ocasionados al interés público por la suspensión de la ejecución de la Resolución impugnada que los originados a la propia recurrente por la ejecución inmediata de ésta.

Una vez aclarado lo anterior, procede poner de manifiesto la procedencia de la denegación de la solicitud de suspensión planteada por ASTEL ya que, tal y como se estableció en el resuelve segundo de la Resolución recurrida, el procedimiento de identificación de llamadas de tránsito con destino a numeraciones de Red Inteligente debía estar operativo en el plazo de dos meses desde la fecha de aprobación, lo que quiere decir que este procedimiento, que únicamente es de obligada aplicación para los operadores que tengan firmado con Telefónica de España, S.A.U. (en adelante, TESAU) un acuerdo de interconexión basado en la OIR 2005, deberá estar operativo el 13 de septiembre de 2006. Esto es, en estos momentos, tanto TESAU como los operadores interconectados con ésta de acuerdo a la OIR 2005, deberían estar



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

en fase muy avanzada de implantación del procedimiento, por lo que, la suspensión de la Resolución hasta que se resolviera el recurso causaría evidentemente un perjuicio a dichos operadores, al haber empleado ya recursos en desarrollar dicha solución y no poder ponerla en la práctica. Los hipotéticos perjuicios referidos ya se habrían producido en el momento actual, por lo que una suspensión en el momento actual no evitaría los perjuicios esgrimidos por la recurrente.

Asimismo, la no suspensión de la Resolución sólo podría perjudicar a los interesados en el caso de que el recurso interpuesto se resolviera a favor de las tesis de ASTEL, ya que, en ese caso tanto TESAU como los operadores interconectados de acuerdo a la OIR 2005 deberían implantar en red el nuevo procedimiento con los 9 NRN en vez de sólo 3. Sin embargo hay que tener en cuenta que este procedimiento sería en realidad una variante del procedimiento anterior. Pues bien, independientemente de cómo se resuelva el recurso interpuesto, suspender la Resolución implicaría que el objetivo principal requerido por TESAU de distinguir las llamadas de tránsito a números de red inteligente no podría ponerse en práctica, provocando un perjuicio mayor que el que se pudiera ocasionar en el caso de implantar dicho procedimiento y posteriormente modificarlo para incluir los NRNs que identifiquen las OIR precedentes, en el caso de que el recurso interpuesto por ASTEL fuera estimado.

De manera que, no puede admitirse la alegación de la recurrente relativa a que la ejecución de la misma causaría efectos de difícil o imposible reparación. La Resolución recurrida permite como mínimo, distinguir las llamadas hacia números de RI que han sido directamente encaminadas desde el operador origen al destino de aquéllas encaminadas en tránsito por la red de TESAU. Dicha solución mejora la situación precedente y posibilita la facturación diferenciada de las llamadas en tránsito a números de RI. El procedimiento propuesto por ASTEL podría, si así se considera en el correspondiente expediente, mejorar esta solución, pero en cualquier caso, dicho procedimiento propuesto también tiene como objetivo la implantación de una solución que permita diferenciar el tráfico de tránsito a números de red inteligente, por lo que, la ejecución de la Resolución no provoca los efectos de imposible reparación mencionados por ASTEL al constituir una solución al problema existente.

En definitiva, la petición de la recurrente de suspensión de la Resolución de fecha 13 de julio de 2006 carece de fundamento e imposibilitaría la distinción de las llamadas de tránsito a números de RI causando un perjuicio mayor a los interesados que el que se pudiera ocasionar en el caso que posteriormente se resolviera a favor de la recurrente el recurso interpuesto y la implementación del procedimiento debiera ser modificada.

En virtud de todo lo anterior, la Resolución sobre la designación de valores para la identificación de llamadas de tránsito con destino a numeraciones de



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

red inteligente (DT 2006/495), objeto del presente recurso, es plenamente eficaz desde su notificación a los interesados.

En atención a todo lo anterior, y vistos los citados antecedentes y fundamentos jurídicos, esta Comisión

### RESUELVE

**ÚNICO.-** Desestimar la solicitud de suspensión de la eficacia inmediata de la Resolución de esta Comisión, de 13 de julio de 2006, sobre la designación de valores para la identificación de llamadas de tránsito con destino a numeraciones de red inteligente de acuerdo a lo establecido en la OIR 2005 (DT 2006/495), siendo plenamente eficaz desde su notificación a los interesados.

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión correspondiente.

Asimismo, se pone de manifiesto que contra la Resolución a la que se refiere el presente certificado puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.17 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, la Disposición Adicional Cuarta, apartado 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de lo previsto en el número 2 del artículo 58 de la misma Ley.

EL SECRETARIO

Vº Bº

EL PRESIDENTE

Jaime Almenar Belenguer

Reinaldo Rodríguez Illera